



Consejo Económico y Social

Distr. limitada
8 de mayo de 2001
Español
Original: inglés

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

Décimo período de sesiones

Viena, 8 a 17 de mayo de 2001

Tema 5 del programa

**Seguimiento del Décimo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente**

Observaciones presentadas por el Canadá al proyecto de planes de acción para la aplicación en el período 2001-2005 de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI (E/CN.15/2001/5)

1. El Canadá desea agradecer al Centro de Prevención del Delito Internacional el considerable trabajo que ha realizado en relación con el proyecto de planes de acción para la aplicación en el período 2001-2005 de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI (E/CN.15/2001/5). El Canadá tiene una serie de observaciones que hacer a los planes de acción, que van desde cuestiones más bien de procedimiento a observaciones sustantivas, por ejemplo la importancia de que los planes de acción reflejen debidamente el equilibrio que es preciso encontrar entre las diferentes prioridades dentro del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, más especialmente la de la cuestión de la delincuencia organizada transnacional, y otras prioridades, como la prevención del delito, las víctimas del delito, los delitos informáticos, etc.

1. Observaciones generales

2. Algunas de las medidas indicadas en los planes de acción van más allá de los mandatos aprobados por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, el Consejo Económico y Social o la Asamblea General (por ejemplo, en “Medidas nacionales”, “Los Estados deberán” (párr. 10), o “entre las medidas concretas se incluirán” (párr. 17)). Aunque el Canadá entiende que la finalidad de los planes de acción es proponer medidas que cumplan y sigan los compromisos contraídos en la

Declaración de Viena y, por consiguiente, puedan ir más allá de los mandatos existentes, todo compromiso o medida que lo haga deberá ser explícitamente señalado en los planes de acción, a fin de que la Comisión adopte las decisiones adecuadas en el actual período de sesiones.

3. Otra posibilidad sería decir “podrán incluirse” (como en el caso de las medidas nacionales que deben adoptarse en el contexto de las tecnologías de la información (párr. 98)) o “se estudiará la posibilidad” de medidas para “apoyar” (por ejemplo, párrafo 35 e)) o “ayudar”, o bien decir que “podrán contarse” (por ejemplo, párr. 30), etc., en relación con toda medida que no cuente con la aprobación de la Comisión, el Consejo Económico y Social o la Asamblea General. En cualquier caso, el Canadá quisiera que la Comisión estuviera en condiciones de comprender las consecuencias de la aprobación de los planes de acción, ya que dirigirá la labor que habrá de realizarse en los próximos cuatro años en materia de prevención del delito y justicia penal.

4. En relación con las secciones sobre “Compromisos” de los 10 capítulos del documento, el Canadá no sabe muy bien de qué compromisos se trata, especialmente cuando no proceden de la Declaración de Viena; algunos se aplican a los Estados Miembros, mientras que otros se refieren al Centro para la Prevención del Delito Internacional. Cada uno de los compromisos mencionados en las 10 esferas que comprende el Plan de Acción debería dejar esto en claro.

5. Algunos de los compromisos y de las medidas nacionales e internacionales tienen consecuencias presupuestarias que quizá no haya decidido la Comisión:

a) En “Acción contra la corrupción”, se dice que los Estados apoyarán la participación plena y eficaz de los países en desarrollo en materia de corrupción (párrs. 22 d) y 26 c));

b) Aunque en la mayoría de las referencias a la asistencia técnica se dice debidamente que esa asistencia sólo se proporcionará previa solicitud y “a condición de que se disponga de recursos”, algunas referencias no contienen esa salvedad (por ejemplo, párrs. 27 c), 46 a), 59 c), 64 a), 72 y 77 c)).

6. En las secciones del documento que se ocupan de las medidas internacionales, los planes de acción prevén que el Centro para la Prevención del Delito Internacional realizará una labor considerable en relación con las 10 esferas comprendidas en los planes de acción. El Canadá duda de la viabilidad de que el Centro pueda realizar algunos de esos trabajos, habida cuenta de las limitaciones de recursos humanos y financieros con que se enfrenta. Al Canadá le preocupa aun más que la función prevista para el Centro en los planes de acción apenas se refiera a la participación de los institutos que componen la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, a pesar de la función, muy importante, que desempeñan en la aplicación de ese programa. Esta importante omisión debe corregirse en todo el texto, con ayuda de los institutos. Las esferas de trabajo que suscitan dudas al Canadá son las siguientes:

a) En “Acción contra la delincuencia organizada transnacional”, un primer paso en la creación de la base de datos propuesta en el apartado d) del párrafo 18 podría ser estudiar la viabilidad y conveniencia de desarrollar y establecer ese instrumento, por ejemplo mediante un proyecto piloto, para ver si los Estados

Miembros disponen de esos datos y si reunirlos haría posible tratar más adecuadamente la delincuencia organizada transnacional (párr. 18 d) y e));

b) Una observación análoga se aplica al banco de datos que contenga evaluaciones nacionales de la corrupción, en “Acción contra la corrupción” (párr. 33 a)), a la base de datos sobre la trata de personas (párr. 46 b)); la base para registrar los reglamentos y procedimientos sobre armas de fuego (párr. 58 a)), y las diversas bases de datos sobre terrorismo (párr. 70 b));

c) El Canadá duda de que el Centro sea el órgano más adecuado para “estudiar medios para evaluar la eficacia de las medidas contra la trata de personas” (párr. 46 d)) o para realizar la considerable labor mencionada con respecto a los delitos relativos a la informática (párr. 100 c));

d) El Canadá pone en duda que la Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito sea el órgano más adecuado para realizar “estudios de investigación a fondo de las estructuras económicas nacionales” y se pregunta si esa labor no duplicaría la ya realizada por otras organizaciones (párr. 65 e));

7. Toda referencia a programas mundiales, en particular en las secciones sobre “Compromisos”, debería redactarse diciendo “Estudiar la posibilidad de apoyar el programa...”, ya que los Estados Miembros no tienen obligación de apoyar esos programas, que nunca fueron aprobados por la Comisión ni en la Declaración de Viena. Aunque esta modificación se ha hecho en relación con la corrupción (párr. 20 d)), no ocurre así en la referencia a los programas de lucha contra la corrupción que aparece en el párr. 31 e) (las palabras “tanto directamente como” deberían sustituirse por “directamente o”), el programa contra la trata de personas (párr. 35 e)) o el programa contra el blanqueo de dinero (párr. 62 c)).

2. Observaciones concretas

II. Resumen del proyecto de planes de acción^{*}

8. En contra de lo que se dice en el párrafo 4, el Canadá no cree que la afirmación de que “El proyecto de Planes de Acción enuncia los compromisos y las actividades que se prevén de parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal para el periodo 2001-2005” sea exacta. Más bien, como se señaló en la resolución de la Asamblea General aprobada en 2000 sobre seguimiento del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (resolución 55/60), la finalidad del proyecto de planes de acción era incluir “medidas concretas para la aplicación y el seguimiento de los compromisos asumidos en la *Declaración* [la cursiva es añadida], lo que no es lo mismo que refundir en un documento toda la labor que deberá realizarse dentro del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal hasta 2005. Aunque las referencias a la labor ya realizada antes del Décimo Congreso son adecuadas cuando se refieren a temas comprendidos en la Declaración de Viena, la aprobación de esos planes de acción no supone que no deban realizarse otros trabajos en relación con los demás

^{*} Los encabezamientos corresponden a los del proyecto de planes de acción (E/CN.15/2001/5).

mandatos aprobados anteriormente por la Comisión, el Consejo Económico y Social o la Asamblea General. La primera oración debería modificarse del siguiente modo:

“El proyecto de planes de acción incluirá medidas concretas para la aplicación y el seguimiento de los compromisos asumidos en la Declaración, para que la Comisión, en su décimo período de sesiones, los examine y adopte las medidas que estime oportunas.”

9. De conformidad con la observación sobre la función de los institutos que componen la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, debería modificarse la segunda oración para hacer referencia a la labor de esos institutos.

10. Debería modificarse la última oración, apartado a) del párrafo 6 a fin de reflejar más claramente el texto del apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (“Convención”).

11. Deberían modificarse las dos últimas oraciones del apartado c) del párrafo 6, para reflejar la redacción del Protocolo sobre trata de personas:

“También compromete a los Estados Miembros a *estudiar la posibilidad de adoptar nuevas medidas contra la trata de personas* en el contexto del Programa mundial contra la trata de *seres humanos* [título exacto del programa] ... en lograr una reducción significativa de los delitos relativos a la trata *de personas* a más tardar en 2005”.

12. En el apartado d) del párrafo 6 deberían sustituirse las palabras “de la Convención y su” por la palabra “del”, y en el apartado e) del mismo párrafo suprimirse las palabras “de la Convención y”, ya que de la Convención se ocupa el apartado a) de dicho párrafo.

13. Si la propuesta del Canadá de crear un nuevo capítulo sobre la acción en materia de justicia retributiva se acepta, se debería modificar el resumen del capítulo II para hacer referencia a ese nuevo capítulo.

III. Acción contra la delincuencia organizada transnacional

14. Párrafo 10. Como el objetivo 1 refleja los compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la delincuencia organizada transnacional, las obligaciones nacionales deberían imponerse sólo a los Estados “Partes”.

15. El apartado d) del párrafo 10 debería adaptarse a la redacción del apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la Convención.

16. El apartado b) del párrafo 18 es nebuloso y debería suprimirse o ampliarse.

IV. Acción contra la corrupción

17. Las palabras “se contarán” del párrafo 30 (“entre las medidas nacionales para hacer frente a la corrupción interna se contarán”) y “se incluirán” del párrafo 31 (“entre las medidas nacionales para hacer frente a la corrupción transnacional se incluirán”) deberían sustituirse por las palabras “podrán incluirse”. A falta de un

instrumento internacional legalmente vinculante, la introducción de esas palabras daría a los Estados más flexibilidad para mejorar su propia capacidad para luchar contra la corrupción, pero permitiéndoles hacerlo de una forma adaptada a sus necesidades y regímenes jurídicos.

18. *Párrafo 31, apartados c) y f).* Toda referencia a la repatriación del producto de la corrupción resulta demasiado concreta y sigue sometida al debate en curso; se debería matizar más esas referencias o suprimirlas.

19. *Párrafo 31, apartado a).* Antes de las palabras “firma, ratificación” deberían incluirse las palabras “estudiar la posibilidad de la”.

20. *Párrafo 33, apartados a) y b).* Hace falta aclarar cómo se realizará lo que esos párrafos dicen; en el apartado a) deberían añadirse las palabras “solicitadas por Estados Miembros” después de las palabras “medidas prácticas contra la corrupción”.

V. Acción contra la trata de personas y el tráfico de migrantes

21. *Párrafo 35, c).* Suprimir la referencia a la Convención, de la que se ocupa el capítulo III del plan de acción.

22. *Párrafo 35, e).* Además de introducir las palabras “Considerar la posibilidad de” antes de “apoyar”, se propone que se recoja debidamente el nombre del programa: ¿no debería ser “programa mundial contra la trata de seres humanos” (E/CN.15/2001/2, párr. 61)?

23. En los párrafos 44 y 49, la palabra “adoptarán” debería sustituirse por las palabras “deberán adoptar” si se quiere incluir medidas que vayan más allá de lo que el Protocolo exige. Si esta modificación no se considera aceptable, debería revisarse el capítulo para hacer que todas las obligaciones se ajusten estrictamente a las disposiciones del Protocolo pertinente. Por ejemplo, el apartado c) del párrafo 49, en su redacción actual, dice que los Estados “Se esforzarán ... *las medidas para dar apoyo y protección a los migrantes objetos de tráfico y a los testigos*”. ¿Qué se quiere decir exactamente? Podría interpretarse como una sugerencia de un elemento de victimización en relación con los migrantes objeto de tráfico, mientras que, cuando se celebraron las negociaciones del Protocolo sobre migrantes, muchos países, entre ellos el Canadá, estimaron que los migrantes objeto de tráfico no eran víctimas *per se*. Si se conservara en el encabezamiento la palabra “adoptarán” el Canadá desearía que se hiciera una matización en apartados como el c) del artículo 49 (es decir, que se añadieran las palabras “de conformidad con las disposiciones del Protocolo”).

24. *Párrafo 44, f).* ¿Se adoptarán esas medidas en cumplimiento de obligaciones que figuran en cualquiera de los Protocolos? Si no es así, debería suprimirse este apartado.

25. *Párrafos 44 i), 46 a) y 51 a).* Estos párrafos se refieren a contribuciones voluntarias en apoyo del programa mundial contra la trata de personas”. En el proyecto de este plan de acción se hacen otras muchas referencias a ese programa determinado. Sin embargo, en el Programa Mundial contra el tráfico de seres humanos: esbozo de medidas, de febrero de 1991 se dice que el programa no se

presentará a la comunidad internacional para su aprobación hasta 2002. Nos preguntamos cuál es la situación jurídica del programa.

26. *Párrafos 44 j) y 46 c).* ¿Debería aprobar la Comisión la organización de ese foro?

27. *Párrafo 44 k).* Aunque el artículo 9 dispone que los Estados Partes establecerán estrategias amplias contra la trata de personas y protegerán a las víctimas, no se hace referencia alguna a los recursos.

28. Como se ha dicho *supra*, la creación de la base mundial de datos propuesta en el apartado b) del párrafo 46 plantea las siguientes preguntas: ¿dónde encontrará el Centro los fondos necesarios para crear esa base de datos, y dónde y cómo obtendrá la información pertinente? (por ejemplo ¿habrá una obligación, implícita o no, de los Estados Partes de proporcionar al Centro ese tipo de informaciones?). Debe aclararse.

29. *Párrafo 48, e).* En la última línea de este párrafo, la palabra “demás” parece desplazada; debería suprimirse.

VI. Acción contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones

30. Las extensas observaciones relativas a esta sección se han formulado con objeto de lograr cierta coherencia con los capítulos anteriores de los planes de acción, en particular los relativos a los Protocolos sobre la trata de personas y el tráfico de migrantes. Aunque el Protocolo sobre las armas de fuego no ha sido aprobado todavía por la Asamblea General, en el capítulo VI se debe promover la firma y ratificación de este instrumento de la misma forma en que se promueven en los capítulos pertinentes los demás Protocolos. Las observaciones se formulan también con objeto de promover la coherencia entre las medidas que figuran en el capítulo VI y el propio Protocolo sobre las armas de fuego. Los países todavía no han comenzado a aplicar las disposiciones de dicho instrumento y ése debe ser el primer objetivo antes de que se propongan mandatos nuevos o ligeramente distintos.

31. Las “medidas nacionales” que se proponen en el documento (págs. 17 y 18) ¿están comprendidas en su totalidad en el Protocolo, o son de mayor alcance? En el documento se deben señalar las medidas que no estén comprendidas. La misma observación se aplica en relación con las “medidas internacionales” propuestas en las págs. 18 y 19.

32. Se debería suprimir en el apartado d) del párrafo 59 la referencia a la Convención, porque repite lo que ya se dice en los apartados b) del párrafo 13 y a) del párrafo 18.

33. El párrafo 54 de la sección “Antecedentes” se debería modificar para que dijera lo siguiente:

“El tráfico ilícito de armas de fuego está vinculado al delito en varios niveles. No sólo son las armas de fuego *objeto* de actividad ilegal cuando se fabrican o trafican de manera ilícita, sino que también generan violencia cuando se utilizan para realizar otras actividades delictivas. El Protocolo sobre las armas de fuego es el primer instrumento mundial para hacer frente al problema del

comercio ilícito de armas de fuego en su origen. Siendo único en su forma, hace gran hincapié en la prevención, creando un régimen jurídico para el movimiento transnacional de armas de fuego, orientado a prevenir su desviación. A fin de aplicar estas medidas, se requiere de los Estados que penalicen las actividades que no se ajusten al régimen y que cooperen en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de fabricación y tráfico ilícitos. Como instrumento de lucha contra la delincuencia, el Protocolo sobre las armas de fuego contiene instrumentos prácticos para que los funcionarios de represión puedan prevenir, combatir y enjuiciar con eficacia los delitos en él previstos. Cuando las armas de fuego se trafican en gran cantidad, no sólo pueden afectar la seguridad pública desde la perspectiva de la lucha contra la delincuencia sino también a la estabilidad y seguridad interior general de los Estados. Ello determina que su fabricación y tráfico ilícitos sean motivo de preocupación no sólo para los funcionarios de justicia penal, sino también para los ministerios y organismos encargados de las políticas en materia de exportación, asuntos militares y defensa, así como de la consolidación de la paz después de conflictos, el desarrollo sostenible y los asuntos humanitarios. Por ello, las medidas para prevenir y controlar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego deben complementar las iniciativas relativas a las cuestiones más amplias de la seguridad y el control de armamentos.

34. Se debería eliminar del objetivo 1 del párrafo 54 la referencia a la Convención, porque parece incompatible con la forma en que se abordan los otros dos Protocolos.

35. Se debería modificar el objetivo 2 del párrafo 54 para que dijera lo siguiente:

“Adoptar las demás medidas que sean apropiadas para *prevenir y combatir* la incidencia de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y las actividades delictivas conexas, y *promover la cooperación entre los Estados en la elaboración y aplicación de dichas medidas*”.

36. Los párrafos 55 y 56 se deberían sustituir por un texto análogo al que se utilizó en el capítulo anterior en relación con los otros dos Protocolos, a saber:

“55. Los Estados deberán firmar el instrumento tan pronto se abra a la firma tras su aprobación por la Asamblea General. Los Estados que lo firmen deberán realizar todos los esfuerzos a su alcance para ratificarlo tan pronto sea posible después de la firma. La ratificación entraña la obligación de aplicar las disposiciones del instrumento. También representa el compromiso político amplio de adoptar medidas eficaces para prevenir, investigar y enjuiciar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, y de cooperar con otros Estados en esas actividades. *La ratificación requiere la adopción de medidas efectivas de carácter legislativo, administrativo y de otra índole en el plano interno y que se faculte a cada Estado para prestar las formas de asistencia y cooperación a otros Estados Partes que se estipulan en el instrumento.*”

56. Los Estados se prepararán para ratificar el Protocolo sobre las armas de fuego y para poner en práctica sus elementos principales lo antes posible.”

37. Se debería suprimir la segunda oración del apartado a) del párrafo 57, porque los “delitos con fines de apoyo” se refieren a actividades que con frecuencia realizan los Estados.

38. Se debería suprimir el apartado b) del párrafo 57, porque su contenido se halla implícito en el primer párrafo.

39. En el apartado e) del párrafo 57, se deberían sustituir las palabras “las reglamentaciones” por las palabras “los registros”.

40. El apartado f) del párrafo 57 se debería modificar para que dijera lo siguiente:

“f) Establecimiento de la obligación de marcar *únicamente* en el momento y lugar de su fabricación todas las armas de fuego fabricadas en los territorios del Estado, *de marcar todas las armas de fuego importadas* y de marcar las armas de fuego fabricadas anteriormente sin marcación, en el momento de cualquier transferencia posterior que entrañe una importación o una exportación o el tránsito a través de otro Estado.”

41. Se deberían eliminar del apartado h) del párrafo 57 las palabras “sean utilizadas como fuentes de piezas y componentes para la reparación o restauración de otras armas de fuego ilícitas”, porque su contenido excede de las exigencias previstas en el Protocolo.

42. En el apartado k) del párrafo 57 se deberían insertar las palabras “que sea compatible con los respectivos ordenamientos jurídicos internos”, de la siguiente manera: “Acopio, análisis y divulgación de la información pertinente, *que sea compatible con los respectivos ordenamientos jurídicos internos*, (y) que ha de incluir”.

43. Se deberían agregar los dos apartados siguientes al párrafo 57:

“m) Cooperación con organizaciones intergubernamentales, según proceda, en cuestiones relativas al tráfico de armas de fuego, ([Nota: Ello podría incluir organizaciones como la Organización Mundial de Aduanas y la Interpol].)

n) Fortalecimiento de la capacidad de cooperación internacional de elaborar y aplicar medidas contra el tráfico de armas de fuego.”

44. Se deberían agregar dos nuevos párrafos antes del párrafo 58. Éstos se redactarían de manera análoga al texto de los capítulos anteriores relativos a los Protocolos contra la trata de personas y el tráfico de migrantes:

“(…) Colectivamente, los Estados ponen en vigor el instrumento mediante su ratificación. Cada instrumento cobra efecto inicialmente el nonagésimo día después de que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, y para cada Estado que lo haga posteriormente cobrará efecto el trigésimo día después de la fecha en que lo haya ratificado. Los esfuerzos de los Estados por prestarse asistencia mutua desempeñarán un papel importante para la entrada en vigor del instrumento lo antes posible.

(...) Los Estados promoverán un aumento de la cooperación y la coordinación internacionales con el fin de idear formas y medios para prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. En particular, los Estados se prestarán asistencia mutua para rastrear con eficacia las armas de fuego.”

45. Se deberían introducir los cambios siguientes en el párrafo 58:

“58. Las acciones internacionales y regionales en esta esfera consistirán *también* en coordinar, prestar asistencia y facilitar las medidas adoptadas por los Estados Miembros contra el tráfico ilícito de *armas de fuego* y la realización de investigaciones sobre la naturaleza y el ámbito del problema y los esfuerzos realizados por los Estados para hacerle frente. Como sucede con otras iniciativas de lucha contra la delincuencia o de prevención, las actividades internacionales también pueden incluir la prestación de asesoramiento a los Estados Miembros que lo soliciten en materias relativas a la lucha contra las armas de fuego en el plano interno.”

46. Se deberían introducir las modificaciones siguientes en el párrafo 59:

“El Centro para la Prevención Internacional del Delito *promoverá activamente la firma y ratificación de la Convención y del presente Protocolo* y adoptará las medidas siguientes:”

47. Los apartados c) y d) del párrafo 61 se deberían modificar para que dijieran lo siguiente:

c) Reducción de la oferta de armas ilícitas gracias a las medidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos, *incluidos controles más estrictos de la concesión de licencias para los envíos de armas de fuego*, las medidas de seguridad para evitar el desvío de armas de fuego legales al mercado lícito y las medidas técnicas para evitar la reactivación de armas de fuego [*elimínense las palabras “destruidas o”*] desactivadas;

d) Se prevendrán y desalentarán los delitos relativos a las armas de fuego, incluidos la *fabricación* y el tráfico ilícitos y el uso indebido de armas de fuego, mediante la reducción de la oferta de armas de fuego ilícitas (*suprímense las palabras “o imposibles de rastrear”*) y en virtud de los sistemas de mantenimiento de registros, *los requisitos en materia de marcación y el aumento de la cooperación internacional*, que proporcionen pruebas contra los delincuentes y *los medios para reunir dichas pruebas.*”

VII. Acción contra el blanqueo de dinero

48. El apartado b) del párrafo 62 de la sección “Compromisos” se debería modificar para que dijera lo siguiente: “Prestar apoyo a las iniciativas encaminadas a *ocuparse* de los servicios financieros transfronterizos que permiten el blanqueo”.

49. *Párrafo 63, g).* Se deberían agregar las palabras “Estudiar la posibilidad de” antes de la palabra “apoyar”, a fin de que la frase dijera lo siguiente: “Estudiar la posibilidad de apoyar los proyectos ...”. ¿A qué “otros programas o proyectos” se refiere la parte final?

50. *Párrafo 64.* Al final de la segunda oración, después de “otros órganos pertinentes” se deberían agregar las palabras “y organismos internacionales”.

51. *Párrafo 65, a).* Después de las palabras “leyes y reglamentos nacionales contra el blanqueo de dinero” se deberían agregar las palabras “que sean compatibles con las normas internacionales”.

52. *Párrafo 65, e).* Después de las palabras “los Estados o los tribunales” se deberían agregar las palabras “, incluso en coordinación con los países donantes y otros órganos internacionales”.

VIII. Acción contra el terrorismo

53. Se debería suprimir el apartado b) del párrafo 69, porque parece estar fuera de lugar.

54. ¿Ha aprobado la Comisión alguna de las medidas propuestas en el párrafo 70? ¿No se realiza ya parte de esa labor en Nueva York? Las medidas propuestas parecen exigir muchos recursos y entrañan el riesgo de superposiciones.

IX. Acción sobre prevención del delito

55. Antes del actual texto del párrafo 73, agréguese lo siguiente:

“73. La Declaración de Viena y otros instrumentos internacionales enuncian los compromisos siguientes:

a) Tener en cuenta y abordar toda dispar repercusión de los programas y políticas en hombres y mujeres (párr. 11);

b) Formular recomendaciones de política orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de la mujer, como víctima, reclusa o delincuente (párr. 12);

c) Combatir la violencia derivada de la intolerancia sobre la base del origen étnico (párr. 21);

d) Adoptar medidas de lucha para prevenir el fenómeno cada vez mayor de los menores en circunstancias difíciles que corren a menudo el riesgo de convertirse en delincuentes o de caer fácilmente en las redes de los grupos delictivos, incluidos los que se dedican a la delincuencia organizada transnacional (párr. 24)¹;

e) Incluir disposiciones relativas a la justicia de menores en los planes nacionales de desarrollo y en las estrategias internacionales de desarrollo (párr. 24)²;

f) (...)”,

y conviértase el actual párrafo 73 en el apartado f).

56. Sustitúyase el párrafo 74 por los siguientes párrafos:

“(…) Se reconoce en forma generalizada en la actualidad que los programas adecuados de prevención y readaptación son parte fundamental de una estrategia eficaz de control del delito (tercer párrafo del preámbulo). El éxito demostrado de las iniciativas de prevención en numerosos Estados ha contribuido a la confianza cada vez mayor en ellas y a su aceptación en los países capaces de lograr reducciones considerables de la delincuencia

¹ Este párrafo se ha adaptado y trasladado de los apartados b) y d) del párr. 86.

² Este párrafo se ha trasladado del apartado c) del párr. 86.

(párr. 25). La posibilidad de evitar la repercusión en las víctimas del delito, de reducir los costos financieros y de otra índole vinculados a los componentes reactivos del sistema de justicia penal, así como la de reducir otros costos de la delincuencia han pasado también a ser motivaciones importantes para lograr un equilibrio mayor entre los componentes preventivo y reactivo de los mecanismos de los Estados para hacer frente a la delincuencia y a la victimización.

(...) Un elemento fundamental de la prevención eficaz del delito es la participación, como asociados y protagonistas, de los gobiernos, las instituciones nacionales, regionales, interregionales e internacionales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y los diversos sectores de la sociedad civil, incluidos los medios de información y el sector privado (párrafo 13). Otro aspecto determinante para la prevención eficaz del delito es que las estrategias de prevención en los planos internacional, regional, nacional y local aborden ampliamente los factores de riesgo relacionados con la delincuencia y la victimización mediante políticas y programas sociales, económicos, de salud, educacionales y judiciales (párr. 25). Este enfoque de la prevención del delito basado en el desarrollo, unido a otro de carácter situacional, cuando proceda, permite elaborar respuestas ante los problemas determinados que hacen vulnerables a los jóvenes en situaciones difíciles, a fin de impedir que caigan en la delincuencia o de reducir al mínimo el grado de su participación en actividades delictivas, incluidas las actividades delictivas organizadas. Este enfoque multisectorial, basado en la comunidad y centrado en grupos determinados proporciona también un marco en el que formular estrategias preventivas para los problemas que se originan en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.”³

57. Se debería eliminar la palabra “iniciativas” del párrafo 74, en que se enuncia el objetivo 1 y sustituirlo por la frase “estrategias amplias de prevención del delito”;

58. Se debería añadir un nuevo objetivo, el 3, a continuación del objetivo 2 que se enuncia en el párrafo 74:

“Objetivo 3

Elaborar un programa de acción en el ámbito internacional que determine las esferas prioritarias de colaboración internacional para prevenir el delito con la participación de la comunidad (párr. 24)”.

59. Se debería añadir un nuevo párrafo antes del apartado a) del párrafo 75:

“(...) Asumir el liderazgo nacional fomentando la estrecha cooperación entre los distintos sectores, como la justicia, la salud, la educación, los servicios sociales y la vivienda, cooperación que es indispensable para apoyar la prevención eficaz del delito con la participación de la comunidad;”

³ Véase el informe del curso práctico sobre la participación de la comunidad en la prevención de la delincuencia y el informe sobre los debates relativos al tema V del programa, titulado “Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situaciones”, en *Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Viena, 10 a 17 de abril de 2000: informe preparado por la Secretaría* (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.00.IV.8).

60. A continuación de las palabras “dichas iniciativas”, que figuran en el apartado a) del párrafo 75, debería añadirse la siguiente frase:

“, teniendo presente la importancia de obrar en la medida de lo posible basándose en prácticas que han dado buenos resultados y de equilibrar de forma adecuada los distintos enfoques de prevención del delito con la participación de la comunidad;”

61. Deberían añadirse dos nuevos apartados al párrafo 75:

“(…) Incorporar en las políticas nacionales una estrategia integrada de prevención de la delincuencia juvenil;

(…) Apoyar la implantación de prácticas de prevención del delito que tiendan a prevenir la revictimización;”

62. En relación con el apartado b) del párrafo 75, habría que aclarar cuál es el fin de la vigilancia. Cabe observar que el apartado c) del párrafo 75 también se refiere a la vigilancia, “controlar”, aunque en este caso se vincule a las posibilidades de violación de las libertades civiles;

63. También en el apartado c) del párrafo 75, es necesario aclarar la vinculación entre los programas de prevención del delito y las posibilidades de violación de las libertades civiles. Si se deja la referencia, convendría enmendar el apartado del modo siguiente:

“c) Elaborar, aplicar y vigilar los enfoques de prevención situacional y otros enfoques de prevención del delito a fin de evitar que se violen las libertades individuales;”

64. En el apartado e) del párrafo 75 debería añadirse, a continuación de la palabra “delito” la oración siguiente:

“y contribuir a los esfuerzos colectivos que se despliegan para concebir una estrategia internacional amplia de fomento de la prevención del delito con la participación de la comunidad.”

65. En el primer renglón del apartado c) del párrafo 77 deberían añadirse las palabras “y promover” a continuación de la palabra “concebir”, para que concordara con el párrafo 4 de la Declaración de Viena.

66. Deberían añadirse dos nuevos apartados al párrafo 77:

“e) Realizar campañas de sensibilización y educación del público acerca de la importancia de la prevención eficaz del delito y de los aportes que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades y las distintas instancias gubernamentales para contribuir a aumentar la seguridad y paz de las comunidades;

f) Incorporar en las estrategias y normas de prevención internacional del delito medidas destinadas a prevenir y combatir la delincuencia asociada con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.”

Las medidas internacionales enumeradas reflejan los compromisos contenidos en el párrafo 20 de la Declaración de Viena.

67. Debería añadirse también un nuevo apartado g) al párrafo 77:

“g) Incorporar en las estrategias y normas de prevención internacional del delito medidas destinadas a prevenir y combatir la delincuencia asociada con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia (párrafo 20).”

68. Se debería eliminar en el párrafo 78 la referencia a la “delincuencia organizada transnacional”, ya que no encaja en ese párrafo. En el párrafo siguiente se hace una sugerencia para poner de relieve de forma más adecuada la vinculación entre la prevención eficaz del delito con la participación de la comunidad y su repercusión en la delincuencia organizada transnacional.

69. Debería añadirse un nuevo apartado al principio del párrafo 78:

“(…) Un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades que trascienda la atenuación del temor de transformarse en víctima o de experimentar directamente la victimización y aporte beneficios en otros ámbitos, como el de la educación, el empleo, la salud y el disfrute de los espacios públicos;”

70. Debería añadirse al final del apartado d) del párrafo 78 la frase “y una utilización menos frecuente de las cárceles.

71. Se deberían añadir dos nuevos apartados a continuación del apartado d) del párrafo 78:

“(…) Una disminución de los gastos de la justicia penal, la atención de la salud y otros sectores pertinentes;

(…) Una participación constructiva de los ciudadanos, las comunidades y los gobiernos en el esfuerzo colectivo por fomentar la seguridad y la protección y reducir la delincuencia y la victimización.”

X. Acción con respecto a los testigos y víctimas del delito

72. Se debería modificar el apartado g) del párrafo 79 del modo siguiente:

“g) ~~Tener en cuenta~~ *Formular recomendaciones de política orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de las mujeres que son víctimas y testigos en los sistemas de justicia penal y procurar subsanar toda dispar repercusión de los programas y políticas en hombres y mujeres.*”

Ese cambio refleja con mayor precisión los compromisos enunciados en los párrafos 11 y 12 de la Declaración de Viena. Los Estados no se comprometen simplemente a “tener en cuenta” las necesidades especiales de las mujeres que son víctimas y testigos en los sistemas de justicia penal, sino que se comprometen a “formular recomendaciones de política orientadas a la acción”. Esta forma de enunciación denota un compromiso más categórico y activo. Análogamente, el compromiso enunciado en el plan de acción no abarca el compromiso de “subsanar toda dispar repercusión de los programas y políticas en hombres y mujeres”, que se incluye en el párrafo 11 de la Declaración.

73. Añádase un nuevo apartado, f), al párrafo 82:

“f) *Considerar la posibilidad de formular recomendaciones de política orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de las mujeres que son víctimas y testigos en los sistemas de justicia penal que subsanen toda dispar repercusión de los programas y políticas en hombres y mujeres e intercambiar información con otros Estados sobre las mejores prácticas respecto de las víctimas y testigos, por conducto de páginas de Internet o de otros medios o foros que tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres.*”

La inclusión de un análisis basado en el género de las políticas y programas en materia de justicia penal concuerda con el documento titulado “La Mujer en el Año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” (A/55/341), en el que se aboga por la utilización en de las perspectivas de género. Este documento fue aprobado por la Asamblea General en su vigésimo tercer período extraordinario de sesiones, celebrado en junio de 2000. En su quincuagésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 55/71, de 4 de diciembre de 2000, titulada “Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y aplicación cabal de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General”. La Asamblea exhortó a los gobiernos y a las Naciones Unidas a que tomaran medidas eficaces para lograr la aplicación efectiva de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones e instó a las Naciones Unidas a que promovieran una política activa y visible de incorporación de una perspectiva de género.

74. Se debería modificar el párrafo 80 del modo siguiente:

“80. El apoyo a las víctimas y testigos y su protección gozan de reconocimiento como elemento básico importante del *sistema de justicia penal* [elimínese la referencia a las estrategias generales de prevención del delito y lucha contra la delincuencia]. Las medidas de apoyo reducen las consecuencias del delito para las personas más directamente afectadas y son fundamentales para preservar y proteger el papel de las víctimas y los testigos en el proceso de justicia penal, *inclusive* con respecto a la delincuencia organizada y a determinados delitos como la trata de personas ... delitos.”

75. Se debería desplazar el párrafo 81 al nuevo capítulo sobre justicia reformativa.

76. *Apartado a) del párrafo 84.* La enunciación actual de la oración “preparar la creación y administración de un fondo internacional de apoyo a las víctimas de la delincuencia transnacional” ¿implica que se creará ese fondo, que quedará limitado a la delincuencia organizada transnacional y que el Centro para la Prevención Internacional del Delito es el único administrador posible del fondo? Si se conserva el apartado a), debería modificarse como se indica a continuación: “preparar la creación y administración de un fondo internacional”. De esta forma se omitiría la referencia que limita el fondo a la delincuencia organizada transnacional.

77. *Apartado b) del párrafo 84.* Habida cuenta de la redacción poco elegante de este apartado, habría que modificarlo y hacer hincapié en la función del Centro en relación con las víctimas:

“Prestar atención al apoyo de las víctimas y los testigos, especialmente los que son mujeres y niños, y en particular a la prevención de la trata de personas y al turismo sexual.”

78. Apartado d) del párrafo 84. Debería sustituirse su redacción por la siguiente:

“Promover las mejores prácticas en *los programas o servicios de apoyo a las víctimas y testigos*, utilizando, por ejemplo, la página de Internet de International Victimology.”

XI. Acción con respecto al tratamiento del delincuente

79. El texto actual de este párrafo conjuga varios temas, entre ellos la prevención del delito, la justicia de menores, la justicia reformativa, el hacinamiento en las prisiones y alternativas eficaces en sustitución del encarcelamiento. El Canadá prefiere que la sección se centre claramente en el hacinamiento en las prisiones y las alternativas en sustitución del encarcelamiento y que se desplace el material que no sea pertinente a las secciones que correspondan. El Canadá propone también que se modifique la redacción actual del párrafo, que restringe indebidamente el ámbito de aplicación a los menores delincuentes, puesto que el hacinamiento y los beneficios de las alternativas eficaces del encarcelamiento se aplican de lleno a los adultos.

80. Se modificaría el título de la sección para que dijera “Acción con respecto al hacinamiento en las prisiones y alternativas eficaces en sustitución del encarcelamiento”. Este título concuerda con el compromiso enunciado en el artículo 26 de la Declaración de Viena.

81. *Apartado a) del párrafo 86.* No correspondería modificar la redacción en español.

82. Se eliminarían los apartados b), c), d) y e) del párrafo 86, que habría que desplazar a otras secciones, modificando en algunos casos su redacción.

83. Se debería conservar en cambio el apartado f) del párrafo 86 y sus acotaciones, puesto que es un tema importante que vale la pena repetir en el contexto del tratamiento del delincuente y se vincula al tema del hacinamiento en las prisiones y las alternativas eficaces en sustitución del encarcelamiento.

84. Se debería eliminar la frase final “especialmente en el caso de los delincuentes jóvenes o menores”, ya que restringe innecesariamente el objetivo. Hay más adultos que jóvenes hacinados en las cárceles de todo el mundo.

85. Se deberían eliminar los apartados g), h) y l) del párrafo 88, puesto que reaparecen en la nueva sección sobre justicia reformativa. Se mantendría el apartado d), aunque se refiera a la justicia reformativa, porque refuerza el tema de las alternativas eficaces en sustitución del encarcelamiento y no se repite en la sección sobre justicia reformativa. Además, se añadiría un nuevo párrafo:

“m) Elaborar y perfeccionar programas y políticas que aborden las repercusiones dispares que afectan al delincuente en razón de la raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, los bienes, el nacimiento u otros estados.”

86. Esas medidas nacionales reflejan los compromisos enunciados en la Declaración de Viena que se repiten en el apartado f) del párrafo 86 del Plan de Acción.

87. Debería eliminarse el apartado b) del párrafo 90 (justicia restitutiva) y trasladarlo al nuevo capítulo sobre la justicia restitutiva; se debería eliminar la palabra “menores” del apartado c) del párrafo 90, ya que le da un carácter innecesariamente restrictivo.

88. Debería eliminarse la segunda oración del párrafo 91, “Resultado previsto”, por su carácter innecesariamente restrictivo. Los beneficios pueden ser tan importantes para los delincuentes adultos como para los menores.

Nuevo capítulo: “Acción sobre justicia restitutiva”

89. El Canadá propone que se añada los planes de acción un capítulo sobre justicia restitutiva, totalmente nuevo. Si bien los planes de acción actuales contienen fragmentos de información sobre la justicia restitutiva, la forma en que se han enunciado no condice con la importancia creciente de este concepto nuevo concepto.

90. Además, se hace alusión a la justicia restitutiva en dos capítulos distintos de los planes de acción actuales, sobre las víctimas y sobre los delincuentes. Como se indicó en la propuesta del nuevo capítulo, el concepto de justicia restitutiva supone que la víctima, el delincuente y la comunidad han de resolver juntos el conflicto. Al separar las referencias a la justicia restitutiva de la manera en que se hace, no se capta la esencia del concepto.

“(…) Acción sobre la justicia restitutiva

A. Compromisos

1. En la Declaración de Viena y en otros instrumentos se enuncian los compromisos siguientes:

a) Alentar la elaboración de políticas, procedimientos y programas de justicia restitutiva que respeten los derechos, necesidades e intereses de las víctimas, los delincuentes, las comunidades y demás partes interesadas (párrafo 28 y resolución 2000/14 del Consejo Económico y Social);

b) Promover una cultura favorable a los principios de justicia restitutiva entre las autoridades competentes en los ámbitos de aplicación de la ley, las organizaciones que prestan servicios sociales, el poder judicial y las comunidades locales (resolución 1999/26 del Consejo Económico y Social);

c) Garantizar que se imparta información apropiada a los que participen en la elaboración y aplicación de políticas y programas de justicia restitutiva (resolución 1999/26 del Consejo Económico y Social);

d) Fomentar la reeducación y la rehabilitación de los niños y jóvenes que hayan entrado en conflicto con la ley, alentando, cuando proceda, la utilización de métodos de justicia restitutiva como alternativa de las actuaciones judiciales y de sanciones privativas de la libertad (resolución 1999/26, párrafo 8 del Consejo Económico y Social).

B. Antecedentes

“2. La justicia reformativa es un método distinto de responder ante la delincuencia. En lugar de hacer hincapié en que el Estado castigue al delincuente, la justicia reformativa propugna que resuelva el conflicto en el seno de la comunidad. Consiste en componer las relaciones que han sido dañadas, haciendo participar a la víctima en el proceso de reconciliación, en hacer que el delincuente asuma la responsabilidad de sus actos y en incluir a la comunidad en toda solución que se alcance.

3. La justicia reformativa supone un proceso “mediante el cual las partes afectadas por un delito se reúnen para resolver colectivamente la forma de abordar la secuelas del delito y sus consecuencias futuras”⁴.

C. Objetivo

4. Promover un enfoque de la justicia que fomente la avenencia y la reconciliación de las partes que han sido afectadas por un delito -la víctima, el delincuente y la comunidad.

1. Medidas nacionales

5. Se alienta a los Estados a que:

a) Elaboren y apliquen políticas y programas de justicia reformativa, teniendo en cuenta los compromisos internacionales que se han contraído respecto de las víctimas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (resolución 40/34, anexo, de la Asamblea General);

b) Fomenten la cooperación entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales al aplicar los programas de justicia reformativa;

c) Promuevan la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil a fin de hacer comprender mejor la aplicación de los principios de justicia reformativa y fomentar el apoyo de estos principios;

d) Tengan contacto con otros gobiernos, organizaciones no gubernamentales e institutos que integran la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, a fin de intercambiar información sobre las prácticas más adecuadas en materia de justicia reformativa.

⁴ En esta disposición, la frase “justicia reformativa” denota un concepto criminológico general y no forma parte del vocabulario especializado de ningún sistema jurídico o judicial de un Estado Miembro en particular. Véase, por ejemplo, T. Marshall, “The evolution of restorative justice in Britain”, *European Journal on Criminal Policy and Research*, N° 4, 1996, págs. 21 a 43.

2. Medidas internacionales

6. De conformidad con la resolución 2000/14 del Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 2000, relativa a los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia reformativa en materia penal, se convocará una reunión de expertos en la materia con el objeto de que examinen las observaciones recibidas de los Estados Miembros respecto de la conveniencia de elaborar principios comunes sobre justicia reformativa y los medios necesarios para hacerlo y analizar propuestas para la adopción de medidas ulteriores, entre ellas la posible aprobación de una declaración de principios básicos sobre la utilización de programas de justicia reformativa en cuestiones penales (resolución 2000/14 del Consejo Económico y Social).

7. El Centro para la Prevención Internacional del Delito intercambiará información sobre la experiencia que ha adquirido al aplicar y evaluar programas de justicia reformativa.

3. Resultado previsto

8. La elaboración y aplicación de programas de justicia reformativa deberán:

a) ser más satisfactorios para las víctimas, por el hecho de que el proceso reformativo toma en cuenta sus necesidades;

b) hacer comprender mejor al delincuente los efectos que sus actos han tenido en el prójimo (lo que posibilitará su reintegración más cabal en la comunidad);

c) inducir a la comunidad a participar de forma constructiva en el proceso de administración de justicia penal.”
